



**Ayuntamiento de Oencia**  
**C/ Real S/N**  
**24566 OENCIA**  
**(León)**

**Expediente: ACTUACIÓN DE OFICIO 2311/2020**

**Asunto: Vigilancia sanitaria del agua de consumo/ Exclusión/ Arnadelo, Arnado, Lusio, Castropetre, Quintela, Leiroso, Sanvitul, Gestoso y Villarubín**

Ilmo. Sr.:

De nuevo nos dirigimos a V.I. una vez recibido el informe solicitado en relación con el expediente de oficio que se tramita en esta Institución con el número arriba indicado, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como recordará, el motivo de la **actuación de oficio** era que varias localidades de su municipio citadas en el encabezamiento de este escrito, están excluidas del control sanitario del agua de consumo humano que efectúa la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León desde febrero de 2018.

Al parecer se habría solicitado y obtenido la exclusión al amparo de lo establecido en el art. 3.3 b) de la Orden SAN/132/2015, de 20 de febrero, por la que se desarrolla parcialmente el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, lo que podría perjudicar seriamente a la población abastecida (tanto la residente como la población flotante) a la que a partir de ese momento no se le estaría prestando de manera adecuada este servicio público mínimo y de carácter esencial.

Iniciada la investigación oportuna, se le solicitó información en relación con las cuestiones planteadas en aquella.

En atención a dicha petición de información se remitió informe en el cual se hacía constar:

*Que por acuerdo del Pleno de esta corporación, celebrado el día 31 de marzo de 2016, en el punto número 4 del orden del día, se adoptó el acuerdo de encomendar a la Diputación de León la realización del control de agua de consumo humano y por ello posteriormente se firmó el convenio específico con dicho cometido para las localidades*



de Oencia, Arnadelo y Villarrubín.

*Que por acuerdo del Pleno de esta corporación, celebrado el día 25 de enero de 2018, en el punto número 3 del orden del día, se adoptó el acuerdo sobre la ampliación del convenio específico de colaboración entre la Excma. Diputación de León y el Ayuntamiento para la encomienda de realización del control de la calidad del agua de consumo humano a las localidades de Lusio, Castropetre, Arnado, Gestoso, Leiroso, San Vitul y Quintela. Que por acuerdo del Pleno de esta corporación, celebrado el día 12 de febrero de 2019, en el punto número 2 del orden del día, se adoptó el acuerdo de modificación del Convenio específico de colaboración entre la Diputación de León y el Ayuntamiento de Oencia para el control de la calidad del agua de consumo humano limitando el convenio únicamente a la localidad de Oencia y excluyendo el resto de localidades.*

*Dicho acuerdo vino motivado la escasa población de dichas localidades y el excesivo coste que conlleva para el Ayuntamiento el control sobre las mismas, si bien adoptándose medidas alternativas pertinentes sobre la potabilidad de las aguas que aseguren el consumo humano, para dichas localidades.*

*En consonancia con lo anterior, el Ayuntamiento de Oencia encarga anualmente un análisis completo de Arnado, Arnadelo, Gestoso, Villarrubín, Castropetre y Lusío, en concreto en el año 2020 se encargó el mismo, a la entidad (...) SL, realizándose en el mes de julio que emitió la correspondiente factura V/2020/1185 y con un coste de 2.286,90 €. (Se adjunta certificados de los análisis realizados). Por ello señalamos que el agua de consumo humano en el municipio es objeto de análisis periódicos tanto en la localidad de Oencia, dentro del Convenio específico de colaboración entre la Diputación de León y el Ayuntamiento de Oencia; como para el resto de localidades del municipio que reciben un control completo anual.*

Lo anterior se realiza desde el Ayuntamiento de Oencia, sin perjuicio de que, desde tiempo inmemorial la competencia de encargarse de todo lo que se refiere al abastecimiento de aguas de la población de Oencia la hayan venido realizando las distintas Juntas Vecinales del municipio, por lo que cabría calificar a la Junta Vecinal como órgano gestor, es decir, persona o entidad pública o privada que sea responsable del abastecimiento o de parte del mismo, o de cualquier otra actividad ligada al abastecimiento del agua de consumo humano. Por tanto, es la Junta vecinal la que tomará las medidas oportunas para garantizar la realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor y la elaboración periódica de un informe sobre los resultados obtenidos. Dicho esto, en cuanto, a si dichas Juntas Vecinales han obtenido o no, la exclusión del control sanitario del agua de consumo humano que efectúa la Consejería de Sanidad, es un asunto que deberá ser aclarado por dichas entidades locales menores ante el Procurador del Común.”



Una vez se recibió el informe requerido a esa autoridad municipal, se procedió a excluir a ese Ayuntamiento del Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con esta Defensoría.

A la vista de lo informado, nos gustaría efectuarle algunas consideraciones, de las que puede dar traslado a las Juntas vecinales afectadas, por si resultan de su interés.

Lo primero que queremos resaltar es que, en relación con la cuestión que planteamos en nuestra petición de información y durante estos últimos años, se han venido tramitando por esta Defensoría distintas actuaciones de oficio a las cuales efectuaremos continuas alusiones durante nuestra exposición dada la evidente relación e incidencia que va a tener en las consideraciones que hemos de efectuar a ese Ayuntamiento.

Como V.I. probablemente conoce la Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas a consumo humano consideró necesario establecer a escala comunitaria unas normas de calidad básica que debían cumplir las mismas, dada su evidente importancia y repercusión en la salud general de toda la población.

Esta norma prevé, en su art. 3 una serie de exenciones a la aplicación de la Directiva entre las que se encuentra en su punto 2 b) las aguas destinadas a consumo humano procedentes de una fuente de suministro individual que produzca como media menos de 10m<sup>3</sup> diarios o que abastezca a menos de cincuenta personas, a no ser que estas aguas sean suministradas como parte de una actividad comercial o pública. La Directiva citada fue traspuesta al ordenamiento español por el **RD 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano**, fijando en el art. 3 su ámbito de aplicación, aludiendo a todas las aguas definidas en el art 2.1 como aguas de consumo humano y que incluye a las suministradas como parte de una actividad comercial o pública, con independencia del volumen medio de agua suministrado.

Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación del RD 140/2003 -art. 3.2 f)- y en lo que ahora puede resultar de interés:

*“Todas aquellas aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que suministre como media menos de 10m<sup>3</sup> diarios de agua o que abastezca a menos de 50 personas, excepto cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto”.*

Parece claro, a nuestro juicio, que ambas disposiciones únicamente excluyen las



aguas de consumo humano de abastecimientos individuales y/o domiciliarios que abastezcan a menos de 50 personas, pero no excluirían a los suministros públicos, como sin duda son los ofrecidos por los Municipios, independientemente de la población que resida permanentemente en los respectivos núcleos de población que los conforman, puesto que a los suministros públicos se les supone un “plus de garantía” derivada de su propia consideración como **servicio público de prestación y recepción obligatoria**.

Como sabe y conforme establece el RD 140/2003 “*la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano es responsabilidad de la autoridad sanitaria, quien velará para que se realicen las inspecciones sanitarias periódicas en el abastecimiento (...) “La autoridad sanitaria elaborará y pondrá a disposición de los gestores (...) el Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano para su territorio, que remitirá al Ministerio de Sanidad y Consumo”*”.

El Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua en Castilla y León (en adelante PVS) se incluyó en el III Plan de Salud de Castilla y León y resultó exigible a partir del **1 de marzo de 2009**. Dicho programa establecía una serie de actuaciones para garantizar los objetivos de protección a la salud de la totalidad de la población de Castilla y León, fijándose como **objetivo general** del mismo el **control y vigilancia eficiente** de las aguas de consumo humano y entre los objetivos específicos la concreción de responsabilidades, obligaciones y competencias de cada una de las partes implicadas en el abastecimiento, así como la planificación de la vigilancia sanitaria a efectuar.

**Las responsabilidades recaen fundamentalmente en los Municipios (apartado 5 del PVS y art. 4 y siguientes Dec. 140/2003) reservándose la autoridad sanitaria las medidas de vigilancia del sistema creado.**

Transcurridos varios años de funcionamiento de este diseño, que requirió de fuertes inversiones económicas sobre todo para dotar de infraestructuras y medios a los servicios municipales en cumplimiento de las determinaciones del RD 140/2003 y del PVS, en febrero de 2015 se publica la Orden SAN/132/2015 por la que se desarrolla parcialmente el RD 140/2003 y, en lo que ahora resulta de interés, viene a definir abastecimiento menor - art. 2.3- como: “*aquel abastecimiento cerrado de titularidad pública y carácter domiciliario que suministre menos de 10 m<sup>3</sup> diarios de agua o que abastezca a menos de 50 personas, y que no abastezca a ninguna industria alimentaria, ni a ningún establecimiento comercial público con potencial uso de boca entre sus clientes*”.

A continuación, en el art. 3.3 de la Orden SAN/132/2015 señala: “*Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 2 del art. 3 del RD 140/2003, de 7 de febrero, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente disposición:*

*a) las aguas de consumo humano, que se distribuyan a través de redes de titularidad privada que suministren menos de 10m<sup>3</sup> diarios o que abastezcan a menos*



de 50 personas.

*b) los abastecimientos menores para los que la autoridad local haya solicitado expresamente su exclusión, mediante la presentación de una comunicación dirigida al Servicio Territorial competente en materia de sanidad de la provincia en la que se encuentre. En esta comunicación constará de manera expresa que se ha informado a la población abastecida de que el agua no está desinfectada, controlada, ni vigilada, y se indicará el medio por el cual se ha informado. La información a la población abastecida deberá ser reiterada al menos una vez cada 4 años*”.

Como primera reflexión debemos apuntar, y así se lo hemos indicado expresamente a la Consejería competente en la resolución que formulamos en la actuación de oficio **20170473**, que a nuestro juicio la Orden parece exceder lo dispuesto por el RD 140/2003 y la Directiva que la norma estatal traspone, **pues ni en una ni en otra se permite la exclusión en los casos de suministros públicos**, tan solo los individuales y domiciliarios o procedentes de fuentes naturales siempre que cumplan con los requisitos de m<sup>3</sup> y/o de número mínimo de personas abastecidas.

No prevé la norma estatal que un suministro público, de la entidad que sea, pueda quedar al margen de los sistemas de garantía creados para todos (no solo al margen de la vigilancia de la autoridad sanitaria, sino también del control municipal y de la realización de las necesarias labores de desinfección) y ello simplemente por la petición de la autoridad local y únicamente verificando (la Consejería nos indica que lo único que hace es “tomar nota” de la auto exclusión municipal) que se ha informado a los vecinos.

Resulta absolutamente contradictorio que un vecino residente en una localidad excluida del control sanitario tenga garantizada la salubridad y la desinfección del agua si se le suministra a través de cisternas o depósitos móviles (art. 11 RD 140/2003 y apartado 7 PVS) y no del agua que recibe a través de la red de distribución de su localidad y por la que ha abonado los costes (directos o indirectos) derivados de su implantación y las correspondientes tasas para cubrir.

La disposición citada, además, parece chocar con el resto del articulado del RD 140/2003, y para que sus disposiciones no resultaran aplicables a los abastecimientos así excluidos no deberían ser considerados abastecimientos de agua de consumo humano, cosa que de manera evidente no es posible hacer puesto que **se facilita el agua por las entidades locales** para beber, cocinar, lavarse y atender el resto de necesidades de los habitantes de la entidad local, que son habitantes del municipio y por ello tienen derecho a recibir determinados servicios básicos entre los que se encuentra el suministro de agua potable (sobre ello volveremos más adelante).



Como “aguas de consumo humano” **deben ser desinfectadas obligatoriamente**<sup>1</sup> – art. 10.2 RD 140/2003-, **debe proporcionarse por la administración unos mínimos de suministro adecuados** – art. 7.1 RD 140-2003 y en definitiva debe garantizarse el acceso al suministro por parte de la administración ya que el suministro de agua potable tiene la consideración de derecho humano básico y está implícito en el derecho a la vida, en el derecho a la protección a la salud y el medio ambiente y en el derecho a una vivienda digna y adecuada, entre otros.

Como VI quizá conozca la proclamación en España del derecho humano al agua no requiere de una declaración explícita, ya que conforme establece el art. 10.2 CE “*Las normas relativas a los derechos fundamentales y a libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España*”, de esta manera es directamente aplicable en nuestro país la resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU, 28 de julio de 2010, que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y del resto de derechos humanos.<sup>2</sup>

A nuestro modo de ver, la norma reglamentaria autonómica obvia la consideración del derecho al agua potable como derecho humano **ya que excluye a determinados ciudadanos, por el hecho de residir, habitual o eventualmente en una población de menor dimensión, del acceso a un derecho que a todos nos corresponde.**

Además, a nuestro juicio, la Orden SAN/132/2015 en el artículo mencionado, vulneraría lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, dado que el servicio de abastecimiento de agua potable es un servicio público mínimo y básico (artículos 25 y 26 LBRL), que el Tribunal Supremo califica como de “asistencia vital”.

Derivado de este carácter de servicio público, las relaciones del usuario con la administración **se concretan en su derecho al establecimiento del servicio, al buen funcionamiento de éste, y al acceso a su prestación en condiciones de igualdad.**

El artículo 18.1 g) de la LBRL reconoce a los vecinos el **derecho a exigir** la prestación, y en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público.

---

<sup>1</sup>Como señala la OMS en su última guía para la calidad del agua potable **la desinfección** es una operación de **importancia incuestionable** para el suministro de agua potable, ya que es **la única barrera** eficaz para la destrucción de numerosos agentes patógenos (principalmente las bacterias) e impide su proliferación a través de los sistemas de distribución.

<sup>2</sup>El Defensor del Pueblo viene dando, conforme a sus funciones, difusión a este reconocimiento, instando a los poderes públicos y autoridades españolas a tenerlo en cuenta en su actuación (Cfr. Derecho al Agua, XII informe sobre derechos humanos, Federación Iberoamericana de Ombudsman, páginas 421 y ss).



En relación con el buen funcionamiento del servicio recordamos, que la continuidad en la prestación es una de las características básicas de todo servicio público, continuidad que se traduce, desde el punto de vista del usuario, en su derecho a la calidad y a la regularidad (calidad definida en cuanto a la calidad sanitaria del agua de consumo en el RD 140/2003, por referirnos más estrictamente a la cuestión que hoy nos ocupa, calidad sanitaria que no ofrece un suministro público sin desinfección, sin control y sin vigilancia sanitaria), lo que incluso podría llevar a considerar que no se presta el servicio público.

Por todas estas razones nos dirigimos, en su momento, a la Consejería de Sanidad mediante resolución sugiriéndole:

“Que se modifique o se deje sin efecto la previsión que se contiene en el artículo 3.3 b) la Orden SAN/132/2015 en relación con los abastecimientos menores, por ser contraria a lo establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano y demás normativa de aplicación.

Que por su parte se garantice la salubridad y la completa vigilancia sanitaria de este suministro vital, que ha sido reconocido como derecho humano básico, en todo nuestro ámbito territorial, en cumplimiento de un básico principio de igualdad”.

La Consejería de Sanidad **rechazó nuestra resolución**, manifestando que la exclusión del programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo de los abastecimientos menores que así lo soliciten no quita para que las pequeñas entidades locales que quieran puedan seguir realizando controles sanitarios si así lo desean, señalando que **esta exclusión es una decisión exclusiva de la autoridad local en el ámbito de su responsabilidad**. Pese a tal rechazo la Consejería nos manifestó que sometería a valoración y estudio la resolución en el sentido de cuidar de la mejor forma posible la salud de los ciudadanos.

Por ello más recientemente hemos vuelto a dirigir a la Consejería de Sanidad, esta vez en el marco del expediente de oficio **0369/2020**, al conocer que cada vez eran más los Ayuntamientos que auto-excluían a localidades de su ámbito territorial del control sanitario del agua de consumo, **asumiendo así la autoridad municipal en exclusividad y bajo su propia responsabilidad la garantía sanitaria del agua que proporcionan a sus vecinos**.

Esta Defensoría no puede permanecer impasible ante la proliferación por el territorio de este tipo de medidas que impactan de manera tan evidente en la calidad de vida y la salud de las personas que residen en las poblaciones más pequeñas y en el medio rural, las cuales además de verse privadas de otro tipo de servicios necesarios, observan cómo ni siquiera se garantiza su derecho a un servicio público básico y esencial, pues no es tal el **suministro de agua sin desinfectar, sin controlar y respecto**



**del cual no se efectúa por la autoridad competente la oportuna vigilancia sanitaria.**

Por ello nos dirigimos nuevamente a la Consejería de Sanidad mediante resolución y hemos solicitado información a todos los Ayuntamientos, como el suyo, que mantienen algún abastecimiento sin control sanitario **en un intento de revertir esta situación**, que nos preocupa especialmente en este momento de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia provocada por el Covid-19, que está acercando a muchas personas a las zonas rurales en un intento de encontrar en ellas una mayor calidad de vida que la que se ofrece en las grandes ciudades, y que no existirá en poblaciones con suministros públicos sin desinfección y sin vigilancia.

Como V.I. conoce perfectamente, la OMS señala que el suministro del agua para consumo humano y el saneamiento **son elementos esenciales para la protección de la salud humana durante todos los brotes de enfermedades infecciosas**. A día de hoy **hay consenso** en distintas organizaciones científicas, como la Organización Mundial de la Salud, el ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y la EPA (Environmental Protection Agency) **en que el virus SARS-CoV-2 no ha sido detectado en aguas de consumo cuando están tratadas al menos con filtración y desinfección, ya que estos tratamientos eliminan o inactivan el coronavirus.**

Por ello, resulta **imprescindible** que **todas las aguas de consumo humano** sean convenientemente **desinfectadas**, ya que sólo así pueden ser seguras para beber, cocinar y para su uso higiénico, máxime teniendo en cuenta la importancia capital que la higiene tiene en el control de la pandemia. Un mínimo de prudencia en la situación actual aconseja que se retomen las labores de desinfección en todos los suministros auto-excluidos, asegurando así el adecuado nivel de protección para todos los ciudadanos y en este sentido hemos formulado la oportuna resolución a la Consejería de Sanidad, en el expediente **0369/2020** al que hemos hecho referencia anteriormente.

En ella además de sugerirle la modificación de la previsión normativa que se contiene en el artículo 3.3 de la Orden SAN/132/2015 en línea con nuestro anterior pronunciamiento, instamos a la Consejería a realizar las modificaciones necesarias para que en todos estos abastecimientos menores se vuelvan a efectuar, al menos, las labores de desinfección y/o filtración del agua suministrada, asegurando así la protección de todos los ciudadanos, no solo frente al virus SARS-CoV-2, sino frente a cualquier otra infección vírica que pudiera aparecer en el futuro.

La resolución formulada ha sido aceptada parcialmente por la Consejería de Sanidad, señalando que el espíritu de la Orden SAN/132/2015 es regular la demanda reiterada de los pequeños núcleos de población sobre la exención de la Vigilancia Sanitaria del Agua de consumo humano (en adelante ACH) sobre el sistema de control del ACH, **el cual es responsabilidad de los municipios**, de unos abastecimientos **que no disponen de sistema de control del agua de consumo por motivos que se escapan**



### **a la competencia de este Centro Directivo.**

Añade la Consejería en su respuesta que, en relación con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que desde ese Centro Directivo se remitió un comunicado por correo electrónico a los Ayuntamientos relativo a las gestiones sobre la desinfección de los abastecimientos, por lo que los núcleos de población pedáneos y/o juntas vecinales habrán recibido las instrucciones de sus Ayuntamientos, y en este sentido hay una nota informativa publicada en el Portal de salud / Sanidad Ambiental -Covid 19- de fecha 10 de abril de 2020.

La información proporcionada en el portal de salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León coincide sustancialmente con el contenido de nuestra resolución, aunque no se refiere expresamente a la situación en la que se encuentran los abastecimientos menores auto-excluidos como el analizado en este expediente, limitándose a reproducir literalmente el contenido de las recomendaciones que al respecto formuló el Ministerio de Sanidad.

Por ello y dada la importancia del tema, e independientemente de la decisión que ha adoptado la Consejería de Sanidad que se limita a reiterar sus anteriores argumentos **en relación con la exclusiva responsabilidad municipal sobre esta cuestión**, nos gustaría sensibilizar a ese Ayuntamiento en relación con todos estos argumentos y otros que a nuestro juicio debe tener muy presentes en relación con el suministro de agua potable en la localidades de a las que nos referimos en esta resolución.

Debemos insistir en recordarle que el RD 140/2003 al establecer las responsabilidades y competencias en su ámbito de aplicación señala (art. 4.1) que los **municipios son responsables** de asegurar que el agua suministrada a través de **cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor.**

De esta manera, aunque el municipio no efectúe la gestión directa del abastecimiento en estas pedanías, **debe controlar que el agua que la Juntas vecinales suministran sea apta para el consumo**, y por lo tanto para el municipio resulta perjudicial que los gestores- en este caso parece que lo son las entidades locales referidas- se hayan eximido de la vigilancia sanitaria, puesto que dejarán de contar para esta labor con el respaldo de la autoridad sanitaria, **y ello sin que cambie la situación del Municipio como responsable de la inocuidad y calidad sanitaria del agua de consumo**, lo que le obligará a actuar aun con mayor celo ante situaciones de incumplimiento o de incidencias con afectación a la salud de la población, **incidencias que sin duda se producirán si no se desinfecta el agua que se suministra<sup>3</sup>.**

---

<sup>3</sup>. Extremo que no hemos podido verificar puesto que, probablemente por error, no se han adjuntado copias de los resultados analíticos de estos abastecimientos.



En este sentido y aunque no sea el objeto principal de análisis en esta actuación de oficio debemos hacer una breve referencia en relación con la **competencia en cuanto a la prestación de este servicio por la evidente incidencia que tiene en cuanto a las decisiones que se han adoptado en relación con la situación sanitaria de estos abastecimientos.**

Como V.I. conoce perfectamente el servicio de abastecimiento de agua potable constituye, de conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 1/98 de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León, **un servicio de competencia municipal y por ello y en principio la competencia para la prestación del servicio** abastecimiento de agua potable le corresponde a ese Ayuntamiento, señalando por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia de 20 de junio de 2007:

*“Un adecuado enfoque del problema pasa por recordar que el artículo 25.2.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, declara como competencia municipal, entre otras, el suministro de agua y alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 20.1.m) de la Ley de Régimen Local de Castilla y León 1/98, de 4 de junio. El artículo 26 de la Ley estatal 7/1985 establece, por lo que ahora importa, que los municipios han de prestar, entre otros, los servicios de abastecimiento de agua potable y el alcantarillado, para lo cual el Ayuntamiento tiene competencia para la aprobación de la correspondiente ordenanza- artículo 22.2 d) de la Ley 7/85.*

*Ahora bien entre las competencias “propias” que atribuye a las Entidades locales menores la Ley de Régimen Local de Castilla y León en el artículo 50.1 **no figura, ni el abastecimiento domiciliario de agua potable ni el alcantarillado** (la negrita es nuestra). Es decir que la norma general, como criterio de atribución competencial habitual, el principio a seguir es entender que la competencia para prestar el servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable o de alcantarillado corresponde al municipio y **no a las entidades locales menores integradas en el mismo, en este caso juntas vecinales”.***

El artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León señala que las entidades locales menores podrán ejecutar las obras y prestar los servicios que les delegue expresamente el Ayuntamiento, añadiendo que dicha delegación, requerirá para su efectividad la aceptación de la entidad local menor, especificándose en el acuerdo de delegación las formas de control propias de esta figura que se reserve el Ayuntamiento delegante y los medios que ponga a disposición de aquella.

En este caso no nos consta que exista la referida delegación de competencias y más bien, a la vista de la información que nos envía parece que la prestación de este servicio por parte de las Juntas vecinales a las que se refiere este expediente se



ampararía en el contenido de la Disposición Transitoria 2 de la citada Ley que señala que las obras y servicios de competencia municipal que se vengán realizando o prestando por las entidades locales menores se considerarán delegadas en éstas, salvo que la Junta o la asamblea vecinal acuerde en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, que su gestión o ejercicio se realice por el municipio del que dependan.

No obstante debemos recordar al Ayuntamiento que esta misma disposición añade, en su párrafo segundo, que de no adoptarse el acuerdo mencionado, **los Ayuntamientos afectados deberán suscribir un convenio con las entidades locales menores en los términos previstos en el artículo 69, apartados 2 y 3, de la Ley 1/1998**, convenio que deberá recoger el alcance de dicha delegación competencial y la **colaboración** que se debe prestar por el mismo.

En todo caso y como estamos razonando, **no puede considerarse a ese Ayuntamiento desvinculado o al margen de su legal competencia** porque las Juntas vecinales hayan venido asumiendo la gestión del abastecimiento de agua potable, dadas las evidentes connotaciones que la prestación de este servicio público representa para la salud de la población que **esa administración local tiene obligación de garantizar**.

Es más, y **puesto que la responsabilidad respecto del control sanitario del agua de consumo sigue recayendo en el municipio**, debe “**velar por el cumplimiento del RD 140/2003, por parte del gestor o gestores del municipio**”.

Por otra parte debemos recordarle que el artículo 29 del RD 140/2003 señala que la **información que debe ofrecerse al consumidor** debe ser puntual, suficiente, adecuada y actualizada, sobre todos y cada uno de los aspectos descritos en el RD 140/2003.

En este sentido nos parece que resulta necesario que **siempre y en todo momento** se muestre, a la vista de todos los vecinos y de cualquier otra persona que eventualmente pudiera residir o transitar por la localidad a la que se refiere este expediente la situación en la que se encuentra el agua de consumo humano.

La Orden SAN 132/2015 -art. 3 b)- señala que la información a ofrecer es que el agua no está desinfectada, controlada ni vigilada, y suponemos que esta habrá sido la ofrecida por las entidades locales menores en este caso, aunque no nos ha remitido copia de los bandos que al efecto se publicaron.

Como hemos indicado a otras administraciones locales que se encuentran en esta misma situación, el aviso en relación con el agua de consumo **debe ser mostrado de forma permanente y visible**, aunque somos conscientes que este aviso, sin duda, influirá muy negativamente en esta localidad puesto que desincentivara cualquier intento de empadronamiento y llegada de nuevos residentes, o de negocios,



rehabilitaciones de edificios, incluso probablemente repercutirá negativamente en el precio de los inmuebles de la zona, pues nadie adquiere un inmueble en una localidad que no cuenta con un suministro fiable de agua potable<sup>4</sup>, pero esta situación tan negativa puede ser paliada en parte si el aviso que se muestra **se corresponde con la realidad sanitaria actual de los abastecimientos** (y que en estos casos es agua controlada<sup>5</sup> por el municipio aunque no controlada por la autoridad sanitaria).

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común consideramos oportuno formular la siguiente **Resolución**:

**Que por parte de la administración local que V.I. preside, o bien se deje sin efecto la solicitud de exclusión expresa de la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano de las localidades aludidas en el encabezamiento de este escrito de la aplicación de la Orden SAN/132/2015, de 20 de febrero -formulada al amparo de lo establecido en su art. 3.3 b)-, ya que dicha disposición resulta contraria a lo establecido en el RD 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios del agua de consumo humano, o bien se solicite nuevamente su inclusión, ya que a la vista de las responsabilidades municipales resulta conveniente que su labor, en relación con la adecuada prestación de este servicio público esencial, venga respaldada por la oportuna vigilancia sanitaria.**

**Que, en su caso, se concrete la competencia en materia de abastecimiento de agua potable en dichas localidades conforme a la normativa recogida en esta resolución, y teniendo en cuenta los requisitos sanitarios y de gestión que deben observarse, valore si en cada supuesto las entidades locales menores pueden garantizar la calidad del agua de consumo en los términos referidos.**

**Que, en su caso, se retomen las labores de desinfección en el agua de consumo en estos abastecimientos, en garantía de la salud de la totalidad de la población residente en las referidas localidades.**

**Que, en todo caso, se mantenga permanente y adecuadamente informados de todas estas circunstancias y de la situación concreta de estos abastecimientos a todos los ciudadanos que pudieran verse afectados por estos suministros.**

---

<sup>4</sup>. Nos gustaría apuntar que en Castilla y León, y en aplicación de esta misma normativa, hay en este momento dos provincias (Segovia y Valladolid) en las que ninguna localidad ha solicitado la autoexclusión. Esta realidad la percibimos desde esta Institución como un elemento importante de **desigualdad en el territorio**, con incidencia y repercusión directa en el problema de la despoblación. A nuestro juicio resulta muy difícil fijar población e incluso mantener la que ahora existe (la mayoría envejecida y con diversas patologías crónicas que se pueden complicar de manera fatal si se produce una contaminación en el agua de consumo) sin un suministro fiable y garantizado de agua potable.

<sup>5</sup>. Si en todos ellos se desinfecta el agua de consumo esta situación también debe aparecer reflejada en los bandos- agua desinfectada y/o clorada y si no es así deberá constar agua sin desinfección-



PROCURADOR DEL COMÚN  
DE CASTILLA Y LEÓN

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN

Tomás Quintana López